

Centroamérica: democracias de baja intensidad¹

Edelberto Torres Rivas

¹ Este texto fue presentado en el VIII Congreso de Sociología, "Estado. Democratización y Desarrollo en Centroamérica y Panamá", que se celebró en Guatemala, del 10 al 15 de octubre de 1988.

1. Introducción

La fuerza de la coyuntura política en Centroamérica y sus exigencias por entenderla crean una tensión casi irresistible para producir textos de circunstancias. El riesgo de hacerlo es tanto como el peligro de reflexionar acerca del entorno cotidiano, sin respetar la distancia temporal que normalmente filtra lo secundario, lo emocional, lo accidental. En todo caso, resulta difícil desentenderse ideológicamente del presente para producir un análisis que pueda captar la dirección del futuro en el que se mueven las cosas.

Existen algunos puntos de partida, inamovibles desde cualquier óptica, para asumir que lo que está sucediendo en Centroamérica es una transición forzada a nuevas estructuras políticas que no necesariamente van a ser democráticas. Lo *primero* y más importante es reconocer que la "liberalización" de ciertas prácticas políticas forman parte de decisiones que se toman y se aplican desde el Estado. No es, en consecuencia, una etapa de democratización desde la sociedad. No corresponde a un victorioso movimiento democratizador que impulsa desde "abajo" las medidas necesarias y que obligue en consecuencia a adoptarlas forzosamente.² Lo *segundo* es que la "transición" ocurre desde una tradición y una estructura de poder profundamente autoritarias que no han sido debilitadas por una derrota política o militar, aunque sí se produce en el seno de una matriz crítica alimentada por las luchas sociales, algunas de las cuales derivaron en conflictos violentos. Lo *tercero*, consecuencia de

² Recuérdese la decisión militar en Guatemala, de convocar a una Asamblea Constituyente y sus amenazas para que los contribuyentes, depositarios de la soberanía popular, no hicieran más que esto.

los dos puntos anteriores, es que las fuerzas anti-autoritarias son débiles, tienen un grado aún elemental de organización y están a la defensiva ideológica.

Las consideraciones anteriores tienen que examinarse a la luz de la variada experiencia regional, donde desde comienzos de la década de los ochenta han tenido lugar procesos electorales para elegir Asambleas Constituyentes y Presidentes, así como otras autoridades menores.³ Estos eventos, en muchos casos rituales electorales limitados al cumplimiento de formalidades demostrativas, han producido efectos diversos que no pueden dejar de mencionarse. Llama la atención, cualquiera que sea el origen espúreo del gobierno que convoca, que se alcanzaron niveles de competitividad y respeto a la libertad de sufragio que no existieron en el pasado bajo regímenes militares. Las prácticas electorales se han dado, de hecho, en situaciones de conflictos violentos como en Nicaragua y El Salvador. Las virtudes de un acto electoral relativamente libre tiene, sin embargo, efectos políticos y psicosociales importantes en la prefiguración de una sociedad democrática.

A estas diversas experiencias políticas hay que sumar las que ha venido produciendo el profundo desajuste económico, de naturaleza múltiple pero originado desde finales de la década de los setenta en el estacamiento de las exportaciones, el debilitamiento profundo de la integración económica regional, los desarreglos financieros y monetarios, el peso de la deuda externa, etcétera. El problema es que la crisis golpea de manera desigual a la región. Es profunda y desintegradora en Nicaragua y

³ El Salvador, 1984, 1985, 1988; Guatemala, 1985, 1986 y 1988, Nicaragua 1984, y Honduras, 1982, 1987.

El Salvador. En todo caso, la naturaleza más íntima de la crisis económica ha revelado, de nueva manera, cuáles eran las grandes debilidades estructurales que el desarrollo de la posguerra había *ocultado, producido y pospuesto*. Los efectos sociales que se expresan en el aumento de las desigualdades sociales y en las oportunidades de prosperar, o la extensión de la pobreza rural y urbana, etcétera; todos estos fenómenos acompañan los procesos de democratización política, volviéndolos contradictorios y ambiguos, como adelante se indica.

2. Las piedras en el camino

Las consecuencias de todo lo anterior para el destino de la democracia son múltiples y azarosas. En la sociedad costarricense, por ejemplo, no se está poniendo a prueba su democracia. No asoma por los cerros ninguna fuerza desestabilizadora de extrema izquierda. El descontento social pareciera no existir porque no existen conflictos sociales. Lo primero existe y creciente pero no alcanza a expresarse. La necesidad de consenso de esta sociedad es muy alta. Desde hace muchos años todo transcurre en un ambiente surcado por intensas rivalidades políticas superficiales. Tan *intensas* que conmueven cada cierto tiempo las estructuras partidarias internas de las dos grandes fuerzas partidarias y las relaciones parlamentarias entre las mismas. Tan *superficiales*, que nada altera el ciclo electoral, ni la capacidad de diálogo y negociación, ni las reglas del juego implícitas en la actual democracia más vieja del continente, como suele calificársele con sobrada razón.

La profunda crisis que casi elimina electoralmente a las fuerzas de izquierda costarricense, no

ha hecho sino reforzar una situación política bipartidista. La democracia política se puede ejercitar de múltiples maneras aun cuando descansa en el piso sólido de desigualdades sociales. La experiencia de Costa Rica constituye una prueba de que cuando es menor, la injusticia social puede expresarse de diferentes maneras o quedar disimulada políticamente. En los últimos años, sin embargo, se han acentuado algunas particularidades que debilitan la gimnasia democrática. Uno de esos rasgos es la virtual desaparición del movimiento sindical, fagocitado por el llamado movimiento solidarista.⁴ El solidarismo es una adaptación local de una fórmula orgánica que proclama la identidad de intereses entre el capital y el trabajo y postula el bien común como proyecto. Otro rasgo, es la importancia política y la fuerza ideológica que han adquirido las organizaciones gremiales del sector privado, su destacado papel como "grupo de presión" en esferas que están más allá de su competencia como empresarios. A veces, las tendencias neocorporativas aparecen con fuerza vinculante entre las políticas del Estado y los intereses privados. En todo caso —como en el resto de Centroamérica— contrasta la magnitud de la organización gremial de los patronos con la extrema debilidad de la organización sindical de los trabajadores.

El desplazamiento conservador de la política

⁴ Collado, Sobrado M.E., *El Sector de Economía Laboral y el Solidarismo como Sistemas Sustitutivos de Auxilio de Cesantía*, tesis de Derecho, UCR, 1986; Barrientos A., Enrique y otros, *Solidarismo, sus repercusiones en las relaciones obrero-patronales de las empresas bananeras en la zona Atlántica de Costa Rica*, Seminario de Graduación, Escuela de Administración de Negocios, Facultad de Ciencias Económicas, 1983; Ureña S., Ana C., *El régimen legal de las Asociaciones Solidaristas en el Derecho Costarricense*, tesis de Derecho, 1985; Gustavo Blanco y Orlando Navarro, *El solidarismo en Costa Rica*, Editorial Costa Rica, 1986.

mundial, acentuado en Centroamérica con el protagonismo de la administración Reagan, ha vuelto irrisorias las anteriores diferencias ideológicas, de estilo político, de vocabulario y hasta en el gesto, entre la social democracia y la oposición conservadora. El Partido Liberación Nacional tuvo durante una larga etapa un espíritu reformista y antioligárquico, nacionalista y modernizador. No fue su anticomunismo lo que calificó los mejores momentos de la socialdemocracia costarricense, que hoy día admite en su interior una fracción socialista democrática y otra, liberal en economía y profundamente conservadora en política. La oposición social-cristiana también tiene en su interior grupos de diverso pelaje conservador unificados por el rechazo al contrincante. Según parece, el bipartidismo acentúa las semejanzas ideológicas y reduce el antagonismo electoral a una selección de rasgos secundarios pero decisivos. No es éste el momento de explicar la naturaleza de la democracia costarricense.⁵ La cultura política del país es sólida porque mantiene vivas las mejores tradiciones de paz interna, estabilidad política, disgusto por las adhesiones ideológicas extremas y tolerancia.

En la medida en que el triunfo sandinista se

⁵ La fórmula política de Costa Rica, según Dabene se originaría en una notable capacidad para saber sacrificar un poco de estabilidad para preservar la democracia y viceversa, Olivier Dabene, *La formule politique du Costa Rica*. These de doctorat de Science Politique, CERTA, Université des Sciences Sociales de Grenoble, 1987, p. 41 y ss. Las razones últimas según otro autor, descansarían en una distribución del poder económico y social capaz de tener impacto, en la naturaleza del poder y los estilos de los actores políticos. Fabrice Edouard Lehoucq, *Explaining the origins of Democratic Regimes, Costa Rica in Comparative Perspectives*, Department of Political Science, Duke University, 1987, p. 38. En el mismo sentido, John Peeler, *Latin American Democracies: Colombia, Costa Rica y Venezuela*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1985, p. 59 y ss.



Guillermo Meza, *La marcha del triunfo*, 1940, óleo y lápiz, 26 x 40 cm

planteó como una larga lucha antidictatorial, el carácter democrático del programa del FSLN estaba asegurado. Pero el proceso histórico de construcción democrática no está asegurado ni por el programa ni por la voluntad de una minoría consciente. La caída del dictador abrió un enorme espacio que sólo ha probado de nuevo que las circunstancias —difíciles sin duda— que están presentes en la erosión o la derrota de una estructura autoritaria, no son las

mismas que luego hacen posible la vida democrática. Los dos mayores obstáculos para alcanzar gradualmente esta última son de naturaleza muy diferente. Una, tiene que ver con el legado autoritario, es decir, la presencia de una tradición de dominio autoritario. Las instituciones de la dictadura pueden destruirse fácilmente frente al empuje de la victoria popular: el Ejército, el organismo judicial, el sistema policiaco y penitenciario, la

legislación, los reglamentos, etcétera. No pueden sustituirse las *mores*, los hábitos inveterados, la mentalidad colectiva que se hace presente en la práctica cotidiana de dominantes y dominados y en su múltiple relación. El otro obstáculo mayúsculo, lejano de las formas culturales y simbólicas del pasado autoritario, lo produce la agresión norteamericana. No sólo es la guerra-de-baja-intensidad que persigue finalidades político-sociales y no militares, sino el bloqueo comercial, el embargo a las importaciones nicaragüenses desde aquel país, etcétera, que ha creado una situación desfavorable.

Los procesos de construcción democrática en Nicaragua se han movido en el interior de una lógica contradictoria, entre asegurar la *total* participación popular —las masas movilizadas que aseguraron el triunfo— y la concentración *total* del poder, para manejar las dificultades de la agresión. La lógica de la revolución no es en sí misma autoritaria como suelen decirlo hoy día los neoconservadores. La revolución destruye con su triunfo todas las intermediaciones políticas previas y las reconstruye para garantizar *más* la participación *que* la representación popular. Lo importante es que se reconozca en las masas populares el rostro múltiple de sus diferentes intereses. Es decir, la unidad de la diversidad social articulada en la categoría pueblo. El problema de la participación popular debe ser el resultado de un empuje natural desde abajo; cuando se le ejecuta como una decisión desde arriba la tentación autoritaria se vuelve irresistible. Este conjunto de dilemas deben ser enfrentados por el sandinismo en el marco de una atroz guerra injusta. De una brutal agresión a una sociedad a la que no se le concedió la oportunidad para intentar su reconstrucción material y política.

En Nicaragua hubo elecciones en 1984, con

una abstención del 24% (menor que en cualquier otro país de la región) y con una participación de siete partidos, todos de oposición al Frente Sandinista. Se eligió un Parlamento unicameral donde participan los grupos que concurrieron al sufragio. La elección fue de hecho supervisada por una miríada de periodistas extranjeros y, con carácter de observadores, varios grupos parlamentarios y académicos. El acto cívico puede ser visto de diversas maneras: como un ritual inevitable frente a las presiones internacionales amigas, o un test de confianza en el apoyo popular, o como un procedimiento previsto en un orden político que se ha proclamado pluralista. Todas ellas tienen algo de verdad pero no bastaron para impedir la condena del gobierno republicano de Washington.

Por ello hoy día en Nicaragua, los procesos democráticos han pasado a convertirse por la fuerza de las circunstancias internacionales, en un elemento de la negociación en torno a la paz; aparece como un pretexto de la “contra” para continuar la guerra. En boca de una fuerza mercenaria por su naturaleza constitutiva, el argumento pierde fuerza y su reclamo se vuelve inconsistente.

Independientemente de que las fuerzas mercenarias no tienen ninguna virtud democrática y menos aún capacidad para construirla en Nicaragua, y ajenos al reclamo puesto como condición para el éxito o el fracaso de un arreglo en favor de la paz (como lo hizo el señor Schultz en su gira de julio 1988 en las cuatro capitales centroamericanas), hay en esto un hecho fundamental: ¿cuáles son las posibilidades reales, sociales e institucionales para continuar construyendo una vida política democrática en el país? ¿Cuál es la democracia posible en las condiciones de un cambio revolucionario interrumpido por una guerra civil? Si se recuerda

que el país se ha visto crecientemente afectado por las consecuencias de la ya mencionada "guerra-debaja-intensidad —cuya finalidad mayor es la desorganización económica y la desmoralización política— debería deducirse que son tales consecuencias las que fijan las condiciones elementales para el proceso de construcción democrática. De manera aún más precisa, en las actuales circunstancias nunca ha sido más cierto que la economía establece los límites para la política, porque ésta, traducida al ejercicio de la guerra, ha sido el factor determinante en el colapso de la economía.⁶

Insistimos en que la guerra, así considerada, es el fracaso de la política por los recursos y finalidades que moviliza y persigue. Tolerar o no a la oposición ya no resulta tan decisivo como la lucha por la sobrevivencia nacional. Un poder que pierde el control de la economía no puede sobrevivir mucho tiempo. El problema, entonces, se traslada dramáticamente a instancias más decisivas y urgentes: disciplinar el mercado de producción y de consumo, regenerar las esferas de la distribución alteradas por la escasez y el mercado "negro", restablecer la confianza en los precios y sobre todo, definir con permanencia las metas en torno a las cuales gira la asignación de recursos y la distribución de excedentes, si los hay.⁷ En resumen, la vida democrática en Nicaragua no sólo depende de la voluntad tolerante o no de la dirección sandinista o del empuje renovador de las organizaciones popula-

res, o de la madurez cívica de la oposición desarmada (la armada, por su cualidad mercenaria no puede responder a este tipo de apelaciones), etc. Todo gira en torno a las posibilidades, casi fuera de control, de restablecer el funcionamiento del sistema económico a fin de asegurar los recursos mínimos para vivir. Las piedras en el camino democrático de Nicaragua son enormes rocas que crecen día a día y son difíciles de remover.

No lo son menores para los otros países de la región, en donde la "transición", para usar un calificativo que es además un interrogante, ocurre bajo otras circunstancias. En Honduras, pero especialmente en El Salvador y Guatemala hubo dictaduras constitucionales desde la década de los sesenta. Gobiernos encabezados por militares, resultado de diversas combinaciones de legalidad electoral e ilegitimidad golpista. En los dos últimos países hubo especialmente una institucionalización del poder militar a través de regímenes encabezados por jefes castrenses. Un discreto juego partidario hizo parte de una fórmula en la que claramente las elecciones no otorgan el derecho a gobernar. Pero sí una legitimidad suficiente que se completa con las metas del orden y la seguridad. Estos regímenes —calificados como democracias de fachada— se fueron agotando en el seno de la crisis política que se generalizó en la década de los setenta. Basta decir que a partir de la presente década se abrieron posibilidades para la constitución de gobiernos encabezados por políticos civiles, resultado de una dificultosa reconstitución del "centro" político. En 1981 ganó un liberal la presidencia de Honduras; en 1984, un democratacristiano en El Salvador y en 1985 otro democratacristiano en Guatemala. Es válido preguntarse si esta liberalización conduce a la democracia. Pareciera antes bien que mantener

⁶ Generalmente se desconocen los efectos profundamente adversos causados por el embargo norteamericano, vigente desde 1983. La sola incapacidad para obtener partes o repuestos del parque industrial o automotriz, todos de origen norteamericano, ha paralizado un sector importante de la economía de Nicaragua.

⁷ Véase *Envío*, Año 7, No. 85, julio-agosto 1988, especialmente "Las medidas económicas de junio: un paquete sin pueblo", Managua.

el control del poder con “recursos de democracia” y dosis renovadas de violencia por intermedio de gobiernos civiles, constituye una astuta estrategia contrainsurgente.

En su lucha contra la insurgencia (real o potencial) el ejército no sólo se ha vigorizado como institución que maneja las armas sino como factor decisivo de poder. De hecho, lo ocurrido en estos últimos años no hace sino ratificar de nuevas maneras y de forma multifacética, las dificultades que siempre encontró la burguesía centroamericana para constituir un poder sin el concurso del ejército y, más aún, para *ejercerlo como gobierno*. ¿Cómo domina, aquí, la clase dominante? En algunos casos, como en los cincuenta años que terminan en 1979 en El Salvador y Nicaragua, con la ayuda del Ejército. Es la expresa renuncia a un *gobierno propio*, un intento histórico que en El Salvador fue, literalmente, un recurso para mantener su poder social quebrantando su poder político. Cualesquiera que sean los inescrutables caminos hacia la democracia política en Guatemala, El Salvador y Honduras, hoy día ella no podrá hacerse si no hay voluntad militar en tal sentido. Otro problema, pero de similar magnitud, lo constituye el sector privado, los empresarios organizados en sólidas cámaras y grupos gremiales, permanentemente a la ofensiva. Como lo dice Baloyra, no quieren ni democracia ni pagar impuestos. Y para ello utilizan el instrumento de la solidaridad gremial y los recursos corporativos, alianzas siempre inestables con alguna fracción militar.

La *cohabitación* de un gobierno civil débil surgido de elecciones y de una institución militar vigorosa que hace la guerra, es precaria como fórmula de transición democrática. Esa debilidad se origina en o refleja también la precaria fuerza del sistema de

partidos políticos en el seno de una cultura autoritaria que impregna las relaciones sociales, los valores, las costumbres de los centroamericanos. Lo más importante, en nuestra óptica, es que la búsqueda de esta transacción que supone ejércitos fuertes con gobiernos débiles, pero civiles y legítimos, constituye no sólo una necesidad interna sino *también* una operación política de democratización limitada impulsada por la política exterior de los Estados Unidos. La operación forma parte de una ofensiva —que no es posible analizar acá— con múltiples propósitos: aislar a Nicaragua y exhibirla como una sociedad autoritaria frente al resto de países que estarían transitando hacia la democracia. Además, exhibir una política exterior preocupada por los valores democráticos y los derechos humanos, que los viejos apoyos locales y las prácticas intervencionistas no contribuyeron a fortalecer en el pasado.

En resumen, en tanto la causa democrática en Guatemala, El Salvador y Honduras descansa en esta etapa en factores que nada tienen que ver con las condiciones básicas de su desarrollo, las dificultades aparecen por todos lados. A su vez, las causas que alimentaron el autoritarismo son “muertos que gozan de buena salud”. A ambos conjuntos de factores habremos de referirnos de inmediato.

3. La transición autoritaria

La cuestión clave que plantea la experiencia centroamericana —y más precisamente, Honduras, Guatemala y El Salvador— es la naturaleza de esta *transición a la democracia política*, sin rupturas y en el supuesto de que el sistema autoritario pueda automodificarse gradualmente por su lógica interna.

¿Tiene una estructura autoritaria la capacidad de "desmontarse" con tino conservador y sin provocar desbordes sociales, establecer mecanismos democráticos? Tal posibilidad no se ha originado desde la sociedad sino desde el Estado. Y aún más, con recursos de fuerza, por iniciativa militar y bajo el ceño fruncido de los generales que no dejan de vigilar la marcha del proceso.

La crisis política planteada a mediados de la década de los setenta sin duda golpeó el corazón del sistema de dominación oligárquico. En el centro de ese sistema estaba el ejército que se modernizó por intermedio de la aplicación contrainsurgente.⁸ Se colocó como el eje de una alianza no explícita entre los diversos y a veces conflictivos grupos económicos dominantes. Sumaron su influencia decisiva la Iglesia católica, siempre presente en los asuntos del poder y los intereses norteamericanos, protéticos y múltiples. La visión geopolítica externa, en Centroamérica, tomó siempre cuidado del orden interno y la estabilidad. Pero en este tramo de la historia reciente, la doctrina de la seguridad nacional adoptó una conducta más beligerante cuando, como lo prueba Schoultz,⁹ el concepto de estabilidad, por mucho tiempo considerado la clave de la seguridad norteamericana, ha sufrido una redefinición que amplía sus límites estratégicos.

Todo esto produjo una forma estatal que, salvo mejor nombre, la llamaríamos contrainsurgente,

⁸ G. Aguilera, "La dimensión militar de la crisis centroamericana" en *Anuario Centroamericano*, Vol. XII, Fasc. 1, 1986 y "El equilibrio de seguridad en Centroamérica" en *Boletín USA-Centroamérica*, No. 3, FLACSO, julio 1988, pp. 3-9.

⁹ Lars Schoultz, *National Security and United States Policy toward Latin America*, Princeton University Press, Princeton, 1987, pp. 321-324.

analizado en otro momento.¹⁰ No existe ninguna ruptura entre el Estado oligárquico, en crisis, y ésta, pues la filiación está condicionada por el relacionamiento polarizado y violento en que se apoyó el estilo señorial de los terratenientes en el pasado y la violencia técnica del estilo contrainsurgente. Es evidente que la estructura de clases, basada en patrones de desigualdad tan grandes, alimentan inequívocamente la polarización política.¹¹ El estilo oligárquico del control político de ayer explica, hoy día, las conductas del orden y la represión. La doctrina de la seguridad nacional reforzó y justificó de nueva manera la tradición de violencia estatal, proponiendo nuevos elementos técnicos e ideológicos para que la fuerza aparezca disimulada y justificada. Se trata de regímenes políticos que practicaron el miedo en gran escala, para desarticlar, descomponer o desmovilizar toda forma de organización o participación popular. La naturaleza de estos regímenes no cambia con actos electorales. Cabe subrayar que no se propusieron antes ni ahora transformar la sociedad ni sus estructuras económicas. Su propósito fue defenderlas aún al precio de inmovilizarlas. La forma estatal contrainsurgente adoptó formalidades democráticas sin buscarlas como resultado de un nuevo tipo de capitalismo.

Después de las elecciones en que triunfaron Suazo Córdova, en Honduras (1981); Duarte, en El Salvador (1984) y Cerezo, en Guatemala (1986), se discute si los procesos electorales, por un lado y el retiro a los cuarteles por el otro, forman parte de

¹⁰ "Guerra, transición y Democracia", en *La democracia posible*, San José Educa, 1987.

¹¹ Manus I. Midlarsky y Kenneth Roberts, "Class, State and Revolution in Central America: Nicaragua and El Salvador Compared", *The Journal of Conflict Resolution*, vol. 29, No. 2, June 1985, pp. 165-66.

Guillermo Meza, *Aparición*, 1950, tinta, 37 x 28 cm

una estrategia de construcción democrática. La respuesta debe tomar en cuenta algunos elementos:

En *primer lugar*, la noción de democracia es reducida a un acto electoral y luego, el ejercicio del voto, como un acto reglado (voto obligatorio), que se realiza en el seno de sociedades aterrorizadas. La cultura del miedo hoy día existente —aspecto olvidado en Centroamérica por los analistas de la crisis— es resultado de la aplicación sistemática del terror contra la población civil. En *segundo lugar*, la implantación de partidos políticos como recurso ineludible para la organización y represen-

tación de la ciudadanía no se ha logrado de manera adecuada. Esto significa que los partidos aún son débiles nacionalmente y todavía no tienen la capacidad de institucionalizar los conflictos de la sociedad para volverlos demandas políticas. La previsibilidad de canalizar demandas que no devengan en enfrentamientos críticos es lo que vuelve democrática o permite una transición democrática en una sociedad. En *tercer lugar*, se recuerda que la guerra civil en los últimos años se amplió en El Salvador; y en Guatemala, el ejército mantuvo no sólo la estructura militar operativa sino los componentes de su táctica contrainsurgente: 900 000 campesinos organizados en patrullas civiles de autodefensa (*sic*), “polos de desarrollo” (en el lenguaje local equivalen a las aldeas estratégicas del Viet Nam). En ambos países, zonas bajo control directo del ejército y una sistemática represión que incluye mano libre para los escuadrones-de-la-muerte. En Honduras, el Ejército se ha fortalecido técnicamente con los múltiples ejercicios conjuntos con Estados Unidos, y recibe sustancial apoyo material que ratifica su condición política.

Tanto los actos electorales como el abandono de funciones gubernamentales por parte del elenco militar han recibido la aprobación y el apoyo de los Estados Unidos. En el primer caso, basta mencionar la contribución que se ha otorgado en dinero y en tecnología electoral; en el segundo, las declaraciones de aprobación pública por funcionarios del Departamento de Estado son tan elocuentes como la desaprobación en privado que reiteradamente vienen realizando para “atajar” la impaciencia de algunos grupos castrenses díscolos. En un artículo donde argumenta sobre el papel jugado por los Estados Unidos en la expansión de la democracia en América Latina, Abrahms asegura

que "... El péndulo histórico que habrían entregado al ejército las nuevas democracias, ha sido detenido durante los siete años y medio de la administración Reagan. En 1980 nadie habría pronosticado que esta Administración sería más efectiva como apoyo a la democracia que cualquiera otra de sus predecesoras."¹² Los actos de impaciencia preceden todo golpe de Estado y son calificados hasta ahora como actos de indisciplina que no hacen sino alimentar la fogosa excitación que alimenta el ejercicio del poder. En síntesis, elecciones y gobiernos civiles para ganar la guerra en El Salvador. Democracia recortada en Guatemala, como victoria política táctica de una estrategia contrainsurgente de largo plazo. Contención militar en Honduras, como ejercicio que prepara una eventual participación en la guerra con Nicaragua.

Como puede verse, en los tres casos que venimos comentando, todo aparece como sofocado por la continuidad de las fuerzas autoritarias. Apertura, liberalización del sistema, transición, cualquiera que sea la denominación conceptual, la crisis centroamericana mantiene vivas las fuerzas democratizadoras en el renaciente movimiento obrero, en la ubicua presencia de los estudiantes, en los proyectos intelectuales de importantes grupos de clase media. De hecho, existió y se mantiene la voluntad democrática que se expresa hoy día en las luchas políticas y en los emergentes movimientos sociales.

Hay, en cualquier época, una voluntad de construir con base en modelos históricos o imaginarios. O con una mezcla de ambos. Es bueno satisfacer la necesidad de lo imaginario, lo que a veces llamamos *utopía*. Los hombres —y especialmente

los intelectuales— en las culturas autoritarias, alimentan ilusiones democráticas. Los más serenos, a condición de que sea lo posible necesario. La democracia política aparece así como la superación actual de las limitaciones históricas, heredadas. Se busca desestimar lo que se tiene y no satisface, para alzarse con una propuesta inmediata, para crearla aquí y ahora. Para empezar en algún momento el proceso de construcción democrática.

La democracia política como democracia posible es el resultado de arreglos —implícitos o no— entre fuerzas sociales encontradas, que termina por tener siempre una expresión institucional. Por ello suele decirse que el problema de la democracia es un problema de las instituciones democráticas. Las posibilidades de iniciar una transición democrática residen en las dificultades reales para establecer quién tiene el ejercicio directo del poder y no sólo del gobierno. No se puede compartirlo ni establecer un poder dual. Mientras sea contingente el retiro a los cuarteles no se habrá renunciado al control de las decisiones políticas básicas. En última instancia, retirarles el poder de veto y volverlos en cuerpo obediente y no deliberante es parte de un largo proceso que requiere de otras coincidencias.

La transición a la democracia implica algo más. Una relativa *despolarización* de las fuerzas políticas y un movimiento correspondiente de renuncia a las posiciones ideológicas extremas. No estamos argumentando en favor de la noción liberal-europea de que sólo el centro político asegura la democracia. La "despolarización" —efectiva o vivida como tal, aunque no se manifieste explícitamente— tiene que ser hoy día en Centroamérica la aceptación *por todos* del mínimo de reglas del juego democrático: participación, oposición, competencia, tolerancia, conflicto reglado, etcétera.

¹² Elliot Abrams, "Latin American in the Time of Reagan", *The New York Times*, julio 27, 1988, p. 27. Traducción nuestra.

Ello implica que las fuerzas de la derecha —en ascenso.¹³— participen en la competencia cívica sin apelación al golpe, si pierden. Es decir, que aparezca finalmente una derecha moderna, lo cual significa que perciban los valores democrático-liberales compatibles en su práctica política con sus intereses económicos de clase. En otras palabras, que no lo experimenten como una contradicción insoportable. ¿Por qué razón? Porque en Centroamérica los autoritarios no son sólo los militares sino numerosas fuerzas sociales de la sociedad que los llaman, los utilizan.

En las condiciones actuales de esta región implica que las fuerzas de izquierda se presenten con una suficiente dosis de modernización para aceptar la participación en un espacio que ellas no han definido hasta ahora y con propósitos de convivencia política. El problema de una izquierda moderna es complejo y cuestionable en Centroamérica. Existiendo en Guatemala y El Salvador fuerzas de izquierda revolucionaria, hablar de otra izquierda, política y electoral, no resulta tarea fácil. Y no lo es porque las fuerzas de izquierda en ambos países no son aceptadas por ser “premodernas” sino por ser insurreccionales. La magnitud de su presencia militar y la oportunidad política pueden ser objeto de debate, sin duda.¹⁴ No lo es, en cambio, el hecho

de que si los enfrentamientos armados no terminan no será posible la construcción democrática. La salida insurreccional es la expresión extrema de un profundo descontento social, cuyas raíces no han sido eliminadas. Parcialmente derrotadas como en Guatemala, parcialmente victoriosas como en El Salvador, potencialmente peligrosas, como en Honduras, su presencia tiene que ser asumida en el análisis como la manifestación de un agravio histórico profundo contra las clases populares, especialmente los campesinos. Es ésta una situación límite, alimentada durante siglos por la brutal explotación económica, el desprecio y la discriminación reiteradas en la vida cotidiana. Odio y desinterés por las masas desheredadas de las ventajas de un crecimiento económico que pasó por encima de ellos. De este agravio participan numerosos sectores sociales y no sólo los campesinos. Sectores de clases medias —intelectuales, estudiantes, maestros, sacerdotes— lo hacen suyo como una toma de conciencia, como un acto de fe, como un problema moral. La conducta revolucionaria se inspira y se justifica así como expresión de solidaridad.

Lo anterior nos remite a la última de las consideraciones claves en la comprensión de las dificultades de esta transición. El ejercicio gradual de la democracia no sólo es lucha electoral. Es también lucha de calles. La movilización popular por la justicia social ha quedado olvidada en los últimos

¹³ La victoria electoral de ARENA, en El Salvador, en las elecciones legislativas de marzo de 1988, le asegura la victoria en las presidenciales de marzo de 1989. En Honduras, nadie duda de la victoria en 1990 de Rafael Callejas, del Partido Nacional, verdadero ganador de las elecciones presidenciales de 1985; en Guatemala, la derecha perdería si va dividida electoralmente. La crisis que la ha afectado es transitoria y aritméticamente —operación que no siempre es útil en lides políticas— constituye una mayoría estadística.

¹⁴ Los esfuerzos por negociar en los últimos tres años, han sido iniciativas de las fuerzas guerrilleras. Pueden corresponder o no a movimientos tácticos. Lo cierto es que la paz interna y la re-

conciliación nacional deben ser alcanzados ya, con urgencia. La sociedad centroamericana en su conjunto está herida de muerte. Quisiéramos llamar la atención acerca de esta afirmación aparentemente catastrófica y pesimista. Las dificultades creadas por la crisis política y por la guerra y sus efectos de largo plazo no podrán quedar resueltos en los próximos treinta años. La responsabilidad de los intelectuales centroamericanos no está a la altura de este futuro trágico no sólo para los sectores subalternos sino para el conjunto de la sociedad.

análisis de la ciencia política latinoamericana, cada vez más conservadora, por el explicable entusiasmo por la democracia política. El dilema es falso y peligroso. No hay disyuntiva alguna entre luchar por el pan, el salario y una vida humana más digna y al mismo tiempo luchar por los derechos democráticos. Pero lo primero no aparece en la visión anti-autoritaria posmoderna. De nuevo, surgen tensiones irremediables entre la democracia real y la democracia formal. Entre la movilización por la justicia social y los combates por un régimen democrático. Es en este aspecto que consideramos que el problema de la democracia no sólo es el de construir instituciones, sino el de activar una ciudadanía capaz de respaldarlas y defenderlas.

La raíz del problema histórico de la democracia en sociedades autoritarias, ha sido la dificultad para disminuir la brecha entre la necesidad de un nuevo principio de legitimidad para el orden político y las dificultades para hacerlo descansar en un renovado concepto de soberanía popular. Hay una radical incoherencia entre los valores políticos, las visiones del futuro, los principios movilizados democráticos y las posibilidades de reali-

zarlos. Las prácticas de los sectores dominantes en el pasado (que con terquedad llamamos 'oligárquicos') se apoyaron en esa brecha. La soberanía popular por lo visto sólo se constituye en el acto del sufragio para luego desaparecer en la cuestionable noción de la "representación popular".

La debilidad en la legitimación del orden político reside por ello en las dificultades para el ejercicio de una ciudadanía real. Las bases socioeconómicas determinaron una modalidad de conducta político-cultural incompleta. Aclaremos esta contradicción. El ejercicio de la ciudadanía efectiva, vista desde la dimensión popular, no sólo es la libertad de organización sino las posibilidades socioeconómicas efectivas para hacerlo. La lucha por la construcción democrática es también definir a los ciudadanos de manera política sobre la base de principios y condiciones de igualdad. Igualdad relativa que permita en los hechos no sólo proclamar los mismos derechos (a pesar de las diferencias socioeconómicas o los recursos culturales de que disponen), sino ejercitarlos. En otras palabras, si la democracia tiene que ser en esta etapa representativa, que haya efectivamente grupos representables.

